

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 4° Juzgado de Letras de Copiapó
CAUSA ROL : C-1034-2016
CARATULADO : EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A./ SOCIEDAD
CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN

Copiapó, veintiuno de Enero de dos mil diecinueve

VISTOS:

A fojas 1, comparece María Teresa Hola Villegas, abogada, en representación de Empresa Eléctrica Atacama S.A., en adelante EMELAT S.A., sociedad del giro de Distribución de Energía Eléctrica, ambas domiciliadas en Avenida Circunvalación Ignacio Carrera Pinto N°51, Copiapó, e interpone demanda en juicio ordinario de incumplimiento de contrato, en contra de Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan, representada legalmente por Yoshifumi Noguchi y Francisco Sánchez Barrera, de quienes ignora profesión u oficio, todos domiciliados en calle Parcela Los Olivos S/N, Sector Punta del Cobre, comuna de Tierra Amarilla, ciudad de Copiapó.

Indica que con fecha 16 de abril de 2010, su representada y la demandada suscribieron un contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica destinadas al uso propio de la demandada en el recinto correspondiente a la faena minera ubicada en el inmueble Rol N°0024-00150, de la comuna de Tierra Amarilla, ciudad de Copiapó, obligándose KOZAN a comprar hasta la totalidad de la potencia convenida y energía asociada a esa potencia para la operación de sus plantas industriales. En cuanto al precio del contrato, y por tratarse de suministro de energía eléctrica no sometido a regulación de precios conforme a lo dispuesto en el artículo 147° de la Ley Eléctrica, las partes estipularon libremente una tarifa, siendo su facturación mensual. Así, en la cláusula sexta del instrumento se describen los componentes en que quedará estructurada la facturación mensual, a saber: Potencia, Energía Activa (6.1); Energía Reactiva y Factor de Potencia (6.2); Peajes y cargos por uso del sistema de transmisión (6.3); Otros Costos (6.4).

Es el ítem 6.3., el punto de inflexión que ocasiona el incumplimiento del contrato por parte de la demandada. En este ítem, correspondiente a Peajes y Cargos por uso del sistema de transmisión, se estipula que serán de cargo de Kozan todos los pagos por el uso del sistema de transmisión troncal y de los sistemas de transmisión no troncales, conforme a la ley vigente y sus futuras modificaciones, reglamentos o normas complementarias, que corresponda pagar por sus consumos, montos que serán incluidos en forma separada en la factura de suministro eléctrico. En ese mismo orden de ideas, el párrafo tercero del mismo ítem señala que Emelat facturará provisionalmente con dicho valor y una vez conocidos los valores definitivos del cargo único y del peaje unitario, las partes re liquidarán los montos facturados por este concepto.



Agrega que es preciso señalar que además de las condiciones acordadas por la partes en el contrato descrito, en todo lo no establecido en éste, el suministro se regiría por las normas y disposiciones establecidas en el DFL N° 4/20.018, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del año 2006, Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y su Reglamento y por las normas establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y sus correspondientes modificaciones.

Expresa que las obligaciones esenciales de las partes provenientes de esta relación jurídica son: para EMELAT la de vender hasta la totalidad de la potencia convenida y energía asociada a esa potencia, según los requerimientos de KOZAN para la operación de sus plantas industriales y, correlativamente, para la demandada, pagar la totalidad del precio por el servicio prestado, conforme al factor carga del cliente, regulado en la cláusula QUINTA del contrato que rige a las partes.

En virtud de la relación contractual que las une, indica que su representada prestó el servicio al cual estaba obligada, en forma regular y continua y de acuerdo a índices de calidad e indisponibilidad de suministro exigidas por la normativa sectorial, teniendo el derecho a cobrar por dicho servicio la tarifa convenida libremente por las partes.

Señala que conforme a la cláusula SEXTA ítem 6.1 del contrato en cuestión, los precios o tarifa acordada, no incluía los costos de peajes ni costos de servicios complementarios, planes de seguridad, planes de emergencia asociados al suministro objeto del contrato, los cuales serían cuenta y cargo de KOZAN conforme a los decretos tarifarios, decretos de racionamiento o instrucciones obligatorias para la operación del SIC que emanen de las autoridades competentes. Asimismo en la cláusula SEXTA ítem 6.3, las partes acordaron que todos los pagos por el uso del sistema de transmisión troncal y de los sistemas de transmisión no troncales, conforme a la ley vigente y sus futuras modificaciones, reglamentos o normas complementarias, que corresponda pagar por sus consumos serían de cargo de KOZAN. Dichos montos serían facturados por su representada provisionalmente con el valor determinado por la Dirección de Peajes del CDEC-SIC en su informe de peajes, siendo aplicable al momento de contratar el cargo único por uso del sistema troncal incluido en el Decreto de Precios de Nudo vigente (Decreto Supremo N°320/2008) correspondiendo a 0.371\$/kWh. Así las cosas, una vez conocidos los valores definitivos del cargo único y del peaje unitario, las partes reliquidarían los montos facturados por ese concepto.

Argumenta que la regulación tarifaria del sector eléctrico establece, tanto para las tarifas del segmento de distribución de electricidad, como para aquellas del segmento de generación-transporte, que cuando un decreto tarifario se dicta más allá del plazo previsto en la normativa al efecto, entonces el decreto tarifario anterior prolonga su vigencia en el tiempo, hasta tanto no se dicte el nuevo, produciéndose en ese momento, con esta última dictación, una aplicación retroactiva de esta tarificación, desde la fecha en que debió haber



regido. Así lo establece el DFL N° 4, del 2006 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, en las siguientes normas: En el Artículo 192 para las tarifas de distribución; en el Artículo 112 para las tarifas de subtransmisión; en el artículo 171 para los denominados precios de nudos de corto plazo que son los que pagan las empresas distribuidoras a las empresas generadoras por la compraventa de energía destinadas a servir a clientes sujetos a fijación de precios o regulados.

Consecuente con lo anterior, expone, que con fecha 9 de abril de 2013 se publica el Decreto Supremo N°14 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el cual fija las tarifas de Subtransmisión y de transmisión adicional y sus fórmulas de indexación para el periodo 2011-2014. Con anterioridad al mencionado D.S. N°14/2012 regía el Decreto Supremo N°320/2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el cual fijaba las tarifas de sistemas de Subtransmisión y su fórmula de indexación para el periodo 2007- 2010, el cual continuó siendo aplicado más allá de su vigencia (31.12.2010), precisamente hasta que se publicó el D.S. N°14/2012, que textualmente dispone en su Artículo Cuarto que: "Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán a partir de su publicación en el Diario Oficial. En todo caso se entenderá que los nuevos valores establecidos en él, entrarán en vigencia a contar del vencimiento de las tarifas del decreto anterior, esto es, el día 10 de enero de 2011". Fundamento esencial de la reliquidación efectuada.

De esta manera, enfatiza que la regulación del mercado eléctrico, se articula de modo tal que cada uno de los segmentos de éste (generación, transmisión y distribución) se encuentra íntimamente vinculado con el otro. Tal concatenación que existe entre los distintos segmentos se explica por la propia naturaleza de la energía eléctrica, que, al no ser almacenable, fluye desde el punto en que esta se genera hasta aquel en que se consume, sin interrupción y sin detenerse.

Es importante destacar que es el cliente final quien paga la energía producida, transportada y distribuida a lo largo de toda la cadena productiva, y ello a partir de las fijaciones tarifarias de todos los segmentos de la misma, no es indiferente para ningún eslabón de esa cadena que en algún otro de esos eslabones se produzcan dictaciones de nuevos decretos más allá de los plazos establecidos en la ley, de modo que se obligue a revisar lo facturado en tiempo pasado (a partir de decretos que tuvieron vigencia ultractiva), para efectuar las reliquidaciones que permitan refacturar lo que corresponda de acuerdo a los nuevos valores.

Señala que en conformidad a lo antes expuesto, KOZAN pese a haber recibido el suministro entregado por su representada y haberlo usado o consumido, se ha negado a pagar el precio total por concepto de peajes y cargos por uso de sistema de transmisión, configurándose de esta forma, el incumplimiento contractual que sustenta esta acción, no obstante habersele demostrado que existió una reliquidación de los montos facturados por



concepto de uso de las instalaciones de subtransmisión para el periodo comprendido entre enero de 2011 y marzo de 2013. Dicha reliquidación fue facturada con fecha 06 de abril de 2015 por parte de la empresa generadora ENDESA, mediante factura N°2696 de EMELAT S.A. procediendo, por lo tanto, al pago de la factura N°2696 con fecha 07 de Mayo de 2015.

En cuanto al derecho expone que en virtud del artículo 1489 del Código Civil solicita la declaración en el sentido que KOZAN ha incumplido la relación contractual que mantuvo con su representada y se le compela al cumplimiento forzado del contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica, solicitando que se le condene a pagar el saldo del precio del servicio prestado por EMELAT que ascienden a la suma de \$967.433.218.- más IVA.

Hace presente además que esta suma de dinero ha sido cobrada extrajudicialmente a la demandada, a través de carta GC/80/2015 de fecha 24 de julio de 2015, sin embargo ésta ha negado o rechazado su pago sin justificación legal alguna, remitiendo su no conformidad con el cobro y la posible facturación, a través de carta AKGG/39 de fecha 10 de Agosto de 2015.

Indica que su representada cumplió íntegramente su obligación de otorgar suministro eléctrico, mientras que la contraria, sin motivo real, jurídico y legal que lo justifique, se ha negado a pagar en la parte que en el presente libelo se demanda correspondiente a peajes y cargos por uso de sistema de transmisión.

La infracción a la fuerza obligatoria del contrato, expone, genera para el acreedor de la obligación incumplida, en este caso su representada, el derecho a reclamar, además del cumplimiento forzado de la obligación, la correspondiente indemnización de los perjuicios causados.

Conforme a lo expuesto y tal como se ha explicado, indica que queda de manifiesto que la presente acción cumple con todos los requisitos para la procedencia de la indemnización de perjuicios fundada en el incumplimiento contractual, es decir:

Infracción de la obligación: No podrá negar la demandada que existe un contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica que la vincula con su representada. Asimismo, es evidente que al negarse a pagar el precio íntegro del contrato, es decir, la suma de dinero correspondiente a peajes y cargos por uso de sistema de transmisión en virtud a este contrato, ha infringido una obligación esencial del mismo.

Imputabilidad de la demandada: KOZAN ha incurrido en un hecho ilícito, consistente en negarse a pagar parte del precio del contrato. Esta conducta se presume culpable, conforme lo dispone el artículo 1547 del Código Civil.

Daño: La falta del pago íntegro o total del precio pactado en el contrato ha provocado a mi representada un evidente perjuicio de carácter contractual.

Relación de causalidad entre el incumplimiento del contrato y el daño: El daño sufrido por su representada deriva precisamente del incumplimiento de la obligación



contractual en que incurrió KOZAN, en cuanto se ha negado a pagar la totalidad del precio proveniente del servicio prestado y consumido conforme al contrato.

Mora del deudor: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.551 del Código Civil, el deudor estará en mora, al menos, desde la notificación de la presente demanda. Sin perjuicio de ello y conforme a lo señalado en el primer numeral de esta norma legal, KOZAN, quedó en mora de cumplir el contrato al momento de recepcionar la carta GC/80/2015 de fecha 24 de julio de 2015, momento en el cual la demandada tomó conocimiento formal e inequívoco de la reliquidación correspondiente a los montos facturados por concepto de uso de instalaciones de Subtransmisión en el periodo comprendido entre enero de 2011 y marzo de 2013.

Por todo lo anteriormente expuesto solicita tener por interpuesta demanda en juicio ordinario civil en contra de "Sociedad Contractual Minera Atacama KOZAN", acogerla en todas sus partes y en definitiva declarar que en virtud de los hechos expuestos y los antecedentes que obren en el proceso, se declare que "Sociedad Contractual Minera Atacama KOZAN", incumplió el contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica celebrado con su representada, de fecha 16 de abril de 2010 y se le ordene cumplirlo, pagando la cantidad de \$967.433.218 más IVA con indemnización de perjuicios, es decir, con los intereses corrientes devengados a partir del día del incumplimiento contractual que motiva la presentación de esta demanda y hasta su pago efectivo, o la cantidad que el Tribunal se sirva fijar conforme al mérito del proceso. Además, se solicita que esta cantidad sea reajustada considerando el mismo periodo indicado para el cálculo de los intereses, con expresa condena en costas.

A fojas 518, la parte demandada contesta la demanda señalando en primer lugar que la pretensión de la actora es ambigua toda vez que por un lado solicita se declare el incumplimiento del contrato de suministro de energía eléctrica con indemnización de perjuicios, pero al momento de peticionar concretamente requiere el cumplimiento forzado del contrato a través del pago de los montos cobrados con indemnización de perjuicios, lo que es incompatible.

Indica que efectivamente su representada con fecha 16 de abril del 2010 celebró el contrato de autos con la parte demandante, el que tuvo una vigencia entre el 1 de agosto del 2010 hasta el 31 de marzo del 2013, fecha en que terminó el contrato. En cuanto a las obligaciones que el contrato generó para las partes, los describe, enfatizando que su representada se encasilla dentro de los denominados clientes libres.

Expone que la piedra angular de la tesis de la contraria, es la aplicabilidad a la relación jurídica que existió entre Atacama KOZAN y EMELAT, del Decreto Supremo N°014 de fecha 13 de abril de 2013. Dos aspectos fundamentales y de la misma forma evidentes enervan sustancialmente la acción de la contraria; en primer término, la circunstancia que el ámbito de aplicación del referido Decreto, según norma expresa del



mismo cuerpo normativo, no alcanza ni se refiere a los denominados “clientes libres”, sino solo a los “clientes sometidos a tarificación”; y en segundo lugar, a la evidente circunstancia que el Decreto tantas veces mencionados comenzó su vigencia cuando la relación jurídica estaba terminada según la ley del propio contrato y las obligaciones que de él emanaban, extinguidas por modos legales de extinguir las obligaciones.

Indica que entiende que por lo expresado en el contrato y en la ley, Atacama KOZAN se vinculó a EMELAT y al CDEC-SIC como “Cliente Libre” o “cliente no sometido a regulación de precios”, verificándose respecto de esa condición o estatus variados derechos y obligaciones, la mayoría de ellos establecidos en el contrato entre las partes; y que el referido Decreto 14 del Ministerio de Energía está dirigido a regular relaciones de clientes sometidos a regulación de precios, lo que hace inaplicable sus variaciones a los contratos especiales suscritos entre las distribuidoras de energía como EMELAT con sus clientes libres como Atacama Kozan.

Lo expuesto, señala, responde a ciertas obviedades, los clientes sometidos a regulación de precios, en general se vinculan con los Centros Económicos de Cargas (CDEC) a través de normativa y reglas generales, lo que implica que el contenido y tarifas de los contratos y obligaciones están dados por la ley y decretos especiales que los deberían regular y proteger, mientras que respecto de los clientes libres, si bien se verifican importantes y gravosas cargas en la ley, las tarifas en general se entregan a la autonomía de la voluntad, entendiendo el contrato como una ley entre las partes mientras éste estuvo vigente. De este modo, resulta del todo obvio que el Decreto Tarifario 14 del Ministerio de Energía no se refiera en ninguna de sus partes a “Clientes Libres”, por lo que los aumentos retroactivos en el valor de peajes que se demandan, no les empecen a los cliente no sometidos a regulación de precios como KOZAN, ni afectan a los contratos suscritos bajo esa denominación, máxime si tales acuerdos de voluntad no estaban vigentes al momento de entrada en vigor del tantas veces mencionado Decreto 14 del Ministerio de Energía.

Respecto a la inaplicabilidad del referido Decreto a un contrato terminado, señala que la mentada regla establece normas que se refieren a su aplicación temporal, indicando que su entrada en vigencia sería el día 9 de abril de 2013. Esta circunstancia, debe contrastarse con la vigencia temporal del contrato cuyo cumplimiento se solicita, que va según lo expresado en el mismo, entre el 16 de Abril del año 2010 y el 31 de marzo de 2013, circunstancia que determina que al momento de terminar la convención por lapso de tiempo, el referido decreto, fuente de la obligación que se demanda, simplemente no nació al derecho.

Así las cosas, de buena fe, señala, con el sentimiento mutuo que nada se debían, las partes finiquitaron el contrato, pagando la última obligación devengada liquidada y entregándose garantías de fiel cumplimiento en señal de término de la relación contractual, iniciándose una nueva etapa en la Sociedad Contractual Minera Atacama



Kozan, quien salía de su vinculación con el Sistema Interconectado Central a través de la Distribuidora Emelat, e iniciaba su contrato de suministro de energía eléctrica con Guacolda Energía S.A. a contar de ese 1 de abril de 2013.

Es por ello, que considera inviable la acción de la empresa eléctrica, quien pretende el pago de obligaciones no devengadas ni existentes ni aun antes del término del contrato, buscando un extemporáneo pago de obligaciones indeterminadas e inexistentes durante la vigencia temporal del contrato, convención respecto de la cual se pagó oportuna e íntegramente todas las obligaciones que arrojaron las liquidaciones presentadas por la ahora demandante.

En cuanto al momento del iter contractual en que se produce el cambio de normativa, señala que al respecto, que la modificación del marco normativo de una relación jurídica, en este caso la supuesta concurrencia de una modificación de la ley tarifaria, tendrá como es de suponer diferentes efectos dependiendo del momento del iter contractual en que nos encontremos; así será diferente la modificación de tarifas de que se trata si se verifican al momento de las tratativas preliminares, al momento de su ejecución, o al término de la relación jurídica obligacional.

El caso de marras, precisa, se encuentra en que la supuesta modificación de condiciones del contrato por efecto retroactivo de un decreto tarifario, está dada al momento en que ha terminado y extinguido completamente una relación jurídica, circunstancia que al parecer a la contraria no tiene como un elemento de juicio relevante en su razonamiento, pues ninguna mención hace a esta muy particular situación.

Sobre el particular argumenta, que el término del contrato determina la desaparición del vínculo jurídico existente entre las partes, lo que implica que una norma por muy expreso que sea su efecto retroactivo, no restaura ni integra ese vínculo ya inexistente entre las partes ni es posible exigir su cumplimiento vía cumplimiento forzado de la obligación.

A mayor abundamiento, señala que es absolutamente cierto y aceptada la existencia de responsabilidad post contractual, pero impone deberes específicos no principales relacionados con el deber de reserva o restitución de garantías, pero no en la aplicación retroactiva de un derecho principal y así de oneroso, por lo que los alcances de la responsabilidad post-contratual no implican el pago retroactivo de obligaciones contractuales.

En cuanto a la teoría de los actos propios, en el caso particular, la demandada ha fundado su pretensión en supuestos cobros generados con ocasión de la dictación de una norma jurídica posterior a la extinción de la relación jurídica entre las partes, sin hacer mayores comentarios sobre el actuar de su representada durante la vigencia del vínculo y menos respecto al íntegro, oportuno y efectivo pago que se realizó respecto de los montos facturados por consumo de prestaciones eléctricas. Al efecto, la contraria ha omitido hacer



presente que al momento del término de la relación contractual nada manifestó respecto a supuestos cobros generados y no pagados por su representada producto del contrato que los ligó, de tal forma que aquellas garantías que fueron entregadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como otras obligaciones, fueron devueltas y entregadas a Atacama Kozan como señal de conformidad en el cumplimiento de las obligaciones y pagos realizados, no existencia de obligaciones pendientes y termino de la relación jurídica que existió entre las partes, al no haber retenido de aquellas garantías siquiera un peso por eventuales cobros no pagados o en el entendimiento que algo quedaba por resolver. En este punto, vale hacer presente, expone, que en el momento de la devolución de las garantías se encontraba vigente el tantas veces mencionado Decreto 14/2013 del Ministerio de Energía.

En cuanto a la falta de concurrencia de los elementos para que se verifique la responsabilidad contractual; señala que existe imposibilidad de condenar al contratante diligente de buena fe. De esta manera Atacama Kozan, mientras estuvo vigente el contrato, mientras hubo algo que cumplir lo hizo oportunamente y de buena fe, de tal forma se puede considerar que se trató de un contratante diligente y que cumplió de buena fe el contrato desde su inicio y hasta su extinción no resultando procedente se le aplique sanción civil alguna propia de un incumplimiento de lo pactado. Al respecto, se está acudiendo a la aplicación de la condición resolutoria tácita envuelta en todo contrato, establecida en el Artículo 1.489 del Código Civil Patrio, solicitando como remedio jurídico el cumplimiento del contrato. No obstante, la propia norma en comento exige que el sancionado no haya cumplido lo pactado, lo que en la especie y como se ha expuesto no se ha verificado, pues mes a mes y durante el tiempo que duró el contrato se pagó de buena fe y de manera íntegra las liquidaciones propuestas por la demandada.

En este sentido, expresa, la responsabilidad civil contractual para su surgimiento como deber jurídico de indemnizar, exige un incumplimiento de una obligación civil, nexo causal entre el incumplimiento y el daño, perjuicio pecuniario, la concurrencia del elemento subjetivo culpa o dolo y que no concurra una causal de legítima exoneración. En el caso de marras, no existe un incumplimiento contractual pues mientras el contrato estuvo vigente este se cumplió y pagó íntegramente de buena fe, en el convencimiento de estar pagando íntegramente la obligación, evidentemente no concurre ni dolo ni culpa, ni existe una vinculación causal entre el supuesto daño aún indeterminado y algún incumplimiento de esta parte.

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato, en la especie, el contrato suscrito y ya extinto por Atacama Kozan y EMELAT obedece a la naturaleza jurídica de ser un contrato de ejecución sucesiva, pues desde su suscripción hasta la fecha de su término, la demandante requirió mensualmente el pago de las prestaciones eléctricas utilizadas por Atacama Kozan, de tal forma que verificándose el pago de cada prestación mensual,



habilitaba la prestación del mes siguiente, y así sucesivamente mientras se mantuvo vigente la relación jurídica, de tal forma que las partes entendieron que por cada pago efectuado por su representada se extinguían las obligaciones del mes cobrado por EMELAT. En consecuencia, por la naturaleza del vínculo contractual entre las partes, es jurídicamente improcedente realizar cobros por prestaciones ya consolidadas y cuyas obligaciones fueron cumplidas y quedaron a firme en su oportunidad.

En lo que respecta a la improcedencia de la solicitud de cumplimiento forzado de un contrato jurídicamente terminado por otras vías y falta de determinación cuantificadora de la obligación, expresa que el cumplimiento forzado no es el remedio jurídico idóneo para el caso presentado por la contraria, por tratarse su representada de un contratante diligente y porque el cumplimiento forzado de una obligación tampoco sería posible en caso que el contrato se encuentre jurídicamente terminado por otros motivos, a saber, el plazo extintivo.

Lo expuesto, precisa, es un argumento más que se suma a todos los expresados que hacen inviable la acción de la contraria, debiendo considerarse además la indeterminación de la obligación cuyo cumplimiento se demanda, pues de los antecedentes acompañados en autos no es posible vislumbrar cómo es que se llega a la cuantía de \$967.433.218.-, circunstancia que también hace inviable esta acción, pues no pone a disposición del tribunal de SS. los criterios para la determinación de una sentencia racional y justa, declarada en función del principio dispositivo respecto del cual las partes son los que fijan el contenido y alcances del problema jurídico sometido al pronunciamiento del tribunal.

Además de las defensas expuestas anteriormente, opone la excepción de pago de los montos cobrados por concepto de peajes, entre el primero de enero de 2012, fecha en que supuestamente entraron en vigencia los recargos de peajes y el 31 de enero de 2013, fecha de término de la relación contractual.

Por todo lo descrito solicita en definitiva tener por contestada la demanda de autos e interpuesta excepción perentoria de pago, solicitando se niegue lugar a la demanda en todas sus partes, todo ello con expresa condenación en costas.

A fojas 539, la parte demandante evacúa el trámite de réplica señalando que todas las argumentaciones de la defensa son refutables con el análisis del tenor literal del contrato suscrito entre ambas partes con fecha 16 de abril de 2010 y que claramente aborda todos y cada uno de los elementos que la contraria en esta oportunidad intenta desconocer.

Luego de señalar cómo funciona el sistema de energía eléctrica y las cláusulas del contrato que estipulan la forma de pago de la misma, señala que queda claramente establecida la aplicabilidad de la norma descrita al contrato suscrito por las partes, concurriendo por tanto los elementos de la responsabilidad contractual. En efecto, de las cláusulas descritas se desprende claramente la existencia de obligaciones pendientes entre



las partes y que subsisten en la actualidad, toda vez que, pese a resultar efectivos los pagos aludidos por la demandada en su contestación, de conformidad a la normativa aplicable y las propias estipulaciones del contrato suscrito, los montos incluidos en las respectivas facturas por concepto de peajes correspondían a valores provisionales, pactándose en el instrumento que una vez conocidos los valores definitivo de cargo y peajes, los montos serán reliquidados, obligándose además Kozan a pagar todo lo que cobre el propietario de los sistemas de subtransmisión y adicionales en todo momento, por el uso de sus instalaciones, cobros que serán traspasados con el respaldo de la documentación correspondiente.

En ese sentido, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), efectuó la respectiva reliquidación definitiva de Peajes de Subtransmisión, la cual fue facturada a su representada, por la empresa generadora con fecha 6 de abril de 2015, mediante Factura N° 2696, valores que corresponde sean pagados por la demandada, de conformidad a lo estipulado en el contrato, y que ésta se ha negado, configurándose de esta forma, el incumplimiento contractual que sustenta esta acción, pese a habersele demostrado que existió una reliquidación de los montos facturados por concepto de uso de instalaciones de subtransmisión para el periodo comprendido entre enero de 2011 y marzo de 2013.

En efecto, expresa que mediante cartas GC/17/2015, de fecha 29 de mayo de 2015 y GC/80/2015, de fecha 24 de julio de 2015, su representada informó a la demandada la reliquidación por subtransmisión pendiente por contratos de suministro de energía eléctrica, adjuntando inclusive Memoria de cálculo de la reliquidación con el respectivo detalle de cálculo de las tarifas aplicadas bajo cada uno de los decretos y de los intereses asociados al reajuste de cobros, con lo que no es posible desconocer el origen y fundamento de la suma demandada de \$967.433.218, ni mucho menos estimar que el contrato cuyo cumplimiento se demanda se encuentra concluido y pagados todos los valores y precios contenidos en él.

En tal sentido, la circunstancia relativa a la devolución de las garantías que caucionaban el contrato, no dice relación precisamente con un actuar de conformidad respecto al integro cumplimiento del mismo a su satisfacción por parte de su representada, toda vez que tal como se desprende de la norma aplicable y el tenor mismo del contrato, la reliquidación asociada a la entrada en vigencia del decreto 14/2013 podría haber sido favorable al cliente, circunstancias en las cuales sería su representada la que se encontraría en una posición de obligatoriedad de devolver los valores cobrados en exceso, correspondientes a peajes y cargos por uso de sistema de transmisión, siendo los montos cobrados en este juicio los únicos que subsisten al contrato, dada la metodología explicada respecto al desarrollo del mercado eléctrico, valores que dadas sus especiales características no eran posible considerar dentro de las cauciones comprometidas en el



contrato, motivo por el cual la devolución de las garantías pactadas no es señal de cumplimiento a cabalidad de las estipulaciones contractuales.

A fojas 547, la parte demandada evacúa el trámite de dúplica, señalando que la contraria en su réplica, se ha referido sólo al primero de los temas propuestos en la contestación, que fue la inaplicabilidad del Decreto 14 de 2013 respecto al contrato de autos, pues su ámbito de aplicación se refiere expresamente a los “clientes sometidos a regulación”. En este punto ratifica todos los argumentos de la contestación, enfatizando que en el ámbito de aplicación del Decreto 14 de 2013 no se reseñaba ni en su texto ni en su espíritu a los clientes libres, como lo fue S.C.M Atacama Kozan en la relación jurídica, por lo que resultaba inaplicable el referido decreto; tampoco es dable aceptar que la mera referencia a normas existentes en la fecha de celebración del contrato hace aplicable otra diferente y posterior, pues tales interpretaciones afectarían de manera grave el principio de autonomía de la voluntad y la libertad contractual de su representada, lo que determina que el tantas veces mencionado Decreto 14 de 2013, no es posible aplicarlo por remisión convencional cuando ésta no ha sido expresa, deficiencias en el argumento de la contraria que hacen inviable su temeraria acción, pues su sustento teórico no es concordante con las lógicas de nuestro ordenamiento jurídico civil.

Agrega además que el contrato objeto de cumplimiento forzado era de ejecución sucesiva. La contraria ha alegado que determinadas prestaciones referentes al concepto “peajes” no habrían sido completamente pagadas. Concuerda entonces que la contraria indica que en las liquidaciones de cada mes entre enero de 2012 y marzo de 2013 deberían ser reajustadas en valores determinados que sumarían \$967.433.218; no obstante, no se aportaron en la demanda ni en la réplica valores específicos que indicaran con certeza cuánto se devengó cada mes y en qué momento debieron pagar determinada suma de dinero respecto de obligaciones que se informan como devengadas pero no pagadas, de manera de permitirles, por bilateralidad de la audiencia y justa determinación de res in iudicium deducta, pronunciarse sobre la pertinencia, entidad y cuantía de cada una de esas obligaciones, y cómo es que llegaron a sumar la cantidad de dinero demandada. Dicha omisión, impide al Tribunal también pronunciarse respecto del contenido de la obligación, tal como a su representada se le impidió contravenir los criterios y montos que supuestamente deben y se les devengaron supuestamente mes a mes desde enero de 2012 a marzo de 2013.

Indica también a este respecto, que ciertos autores reconocen la denominada “Competencia Específica”, indicando que ésta deriva “del principio de inexcusabilidad contenido en el artículo 76 inciso segundo de la Constitución Política de la República, que obliga al tribunal a conocer y fallar un asunto cuando fuere reclamada su intervención de modo legal. Reclamar significa solicitar, pedir. En esto radica esencialmente la competencia específica, es decir, el juez de la causa está autorizado para acoger o no



acoger los fundamentos de una controversia planteada por las partes, pero no puede sentenciar en base a cuestiones de hecho que éstas no le han invocado expresamente, salvo, que la ley lo autorice para proceder de oficio. Si el juez excede de los límites de su competencia específica comete el vicio de ultrapetita o extrapetita que constituyen un tipo de incompetencia que hará anulable su decisión por la vía del recurso de casación en la forma o del recurso penal de nulidad.

Todo lo señalado en cuanto al concepto de competencia específica cobra absoluta relevancia en materia civil pues, en esta materia rige por lo general el principio dispositivo.

En definitiva, señala que la falta de determinación de la obligación cuyo cumplimiento forzado se demanda, y la imposibilidad de su parte de pronunciarse respecto a la manera en que un contrato de ejecución sucesiva no se cumplió, ha fijado el ámbito de atribuciones de este tribunal e impide un pronunciamiento formal respecto de las supuestas obligaciones sucesivas incumplidas, circunstancia que debe tenerse presente al momento de resolver la cuestión sometida a juicio, del mismo modo que la falta de determinación de la constitución en mora o retardo en el cumplimiento de la obligación.

Finalmente reitera los argumentos señalados en su contestación que la contraria no refuta.

A fojas 569, se celebró audiencia de conciliación, sin resultado.

A fojas 572, se recibió la causa a prueba, rectificándose a fojas 587 por vía de reposición.

A fojas 845, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a las observaciones de documentos promovidas por la demandada fojas 753, 782 y 796:

PRIMERO: Que la parte demandada a fojas 753, 782 y 796 observa los documentos emitidos por el Coordinador Eléctrico Nacional, el Banco Santander y la Comisión Nacional de Energía, agregados a fojas 750, 777 y 791, respectivamente, argumentando que dichos oficios emanan de terceros ajenos al juicio, sin tener certeza respecto de su veracidad y suscripción de quiénes los firman, ni su integridad e incluso de la precisión de su contenido, estimando que la contraria intenta a través de oficios de instituciones interesadas en el juicio solicitar informes que carecen de imparcialidad y certidumbre. Sostiene además que el documento para ser considerado pericia, debe ser sometido a las exigencias que establece la ley, debiendo en este caso, haberse dispuesto la comparecencia de quienes suscriben los mentados instrumentos, en calidad de testigos al juicio para darle veracidad a los documentos y fe de su autenticidad.

Agrega respecto de los oficios emanados del Coordinar Eléctrico Nacional y de la Comisión Nacional de Energía que estos carecen de imparcialidad por estimar que las instituciones de las que emanan tendrían interés en el resultado del juicio.



SEGUNDO: Que la parte demandante a fojas 770, 785 y 799, respectivamente, evacúa los traslados conferidos señalando respecto de los oficios emanados por el Coordinar Eléctrico Nacional y de la Comisión Nacional de Energía que la contraria no tiene conocimiento de la regulación eléctrica nacional pues dadas las competencias técnicas de los organismos, se desprende que no tienen ningún interés en el resultado del juicio y no corresponde a agrupación alguna. Agrega que todos estos documentos resultan válidos, pertinentes y deben ser estimados como plena prueba.

TERCERO: Que, efectuado el estudio de las alegaciones, aparece que la parte demandada, sin perjuicio de expresar en un acápite que objeta los documentos por falta de integridad, lo que cuestiona en verdad son únicamente circunstancias que deben ser ponderadas por el Tribunal en su oportunidad, en otras palabras, sus dichos atacan exclusivamente el valor probatorio del documento, actividad que es privativa del órgano jurisdiccional, a lo que se agrega que los demás basamentos, no se fundamentan en causa legal para analizar, motivos todos que importan el rechazo de las observaciones.

En cuanto a las tachas de los testigos interpuestas por la parte demandante a fojas 647, 655 y 663.

CUARTO: Que la parte demandante formuló tachas en contra de los testigos don Óscar Iriarte Ávalos, don Juan Muñoz Manríquez y don Juan Armijo Rojas, por la causal contenida en el N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, argumentando en resumen que los dos primeros testigos mantuvieron una relación contractual con la demandante y el último de ellos una relación laboral con la demandada, relaciones que en la actualidad se encuentran concluidas, lo que permite estimar que los testigos carecen de la imparcialidad necesaria para declarar precisamente en contra de las pretensiones de su representada, porque tienen interés en el resultado del juicio.

Además respecto del testigo Juan Muñoz Manríquez formuló la tacha contenida en la causa N° 7 del artículo 358 del mismo cuerpo legal en razón de estimar que existe una enemistad con la demandante, pues el vínculo contractual del deponente con su representada cesó y a su vez prestó servicios después para la demandada.

QUINTO: Que la parte demandada solicitó el rechazo de las impugnaciones, toda vez que los testigos declararon expresamente no tener ningún interés en el resultado de la causa, y que en todo caso el interés debe ser patrimonial, lo que no se configura. Agrega que el testigo Muñoz Manríquez no puede tener una enemistad con la demandante, ya que ésta última es una persona jurídica contra la cual no se puede manifestar ningún sentimiento, además que de las respuestas del deponente no se manifiesta ningún hecho grave que permita aseverar que exista una amistad o enemistad, como obliga el legislador.

SEXTO: Que al ser preguntados, los testigos Óscar Iriarte y Juan Muñoz señalaron, a modo general, que ellos prestaron servicios para la empresa demandante, relaciones laborales que concluyeron hace algún tiempo, respecto del primer testigo, de manera unilateral por la parte demandante, respecto del segundo, por renuncia voluntaria y que



además tienen conocimiento de los hechos del pleito, don Juan Muñoz refiere además que fue contratado como consultor por Atacama Kozan para la realización del informe respecto del que viene a declarar. Por su parte el testigo Juan Armijo indicó que prestó servicios para Atacama Kozan y que su relación laboral terminó de mutuo acuerdo con la empresa, expresando cada uno de ellos que no tienen interés en el pleito.

SÉPTIMO: Que, las tachas invocadas prohíben la declaración de quienes carecen de la imparcialidad para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto y de los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren. En dicho entendido lo cierto es que de las respuestas entregadas a las preguntas de impugnación, por una parte, resulta imposible configurar el interés exigido por la norma en comento, el que debe ser económico y actual, siendo claro los testigos en señalar que no tiene interés en el resultado del juicio. Por otro lado, respecto del testigo Muñoz Manríquez tampoco se advierte la enemistad que refiere la norma, todo lo que conlleva al rechazo de ambas causales de tacha.

En cuanto al fondo:

OCTAVO: Que doña María Teresa Hola Villegas, abogada, en representación de Empresa Eléctrica Atacama S.A., en adelante EMELAT S.A., sociedad del giro de Distribución de Energía Eléctrica interpone demanda en juicio ordinario de incumplimiento de contrato, en contra de Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan, representada legalmente por Yoshifumi Noguchi y Francisco Sánchez Barrera, todos ya individualizados, solicitando en definitiva se declare que "Sociedad Contractual Minera Atacama KOZAN", incumplió el contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica celebrado con su representada, de fecha 16 de abril de 2010 y se le ordene cumplirlo, pagando la cantidad de \$967.433.218.- más IVA con indemnización de perjuicios, es decir, con los intereses corrientes devengados a partir del día del incumplimiento contractual que motiva la presentación de esta demanda y hasta su pago efectivo, o la cantidad que el Tribunal se sirva fijar conforme al mérito del proceso, por los motivos de hecho y de derecho ya referidos en lo expositivo de esta sentencia, los que se tienen por reproducidos para todos los efectos legales.

NOVENO: Que en su oportunidad la demandada contestó la demanda interpuesta en su contra, solicitando el rechazo de la misma, por los fundamentos de hecho y de derecho también ya referidos en la parte expositiva, los que se tienen por reproducidos para todos los efectos legales.

DÉCIMO Que los trámites de réplica y dúplica fueron evacuados por ambas partes según lo expresado en la parte expositiva de esta sentencia.

UNDÉCIMO Que la causa se recibió a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los que constan a fojas 572 y 587.

DUODÉCIMO Que, la actora para acreditar sus dichos aportó la siguiente prueba:

Documental:



- A fojas 597, contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica suscrito entre Atacama Kozan y Empresa Eléctrica Atacama S.A. de fecha 16 de abril de 2010.
- A fojas 674, Boleta de Garantía N° 2458 del Bank Of Tokyo- Mitsubishi UFJ tomada por SCM Atacama KOZAN en favor de EMELAT S.A. por un valor de US\$663.000.- para garantizar remanentes de potencia y Boleta de Garantía N°2459 del Bank Of Tokyo- Mitsubishi UFJ tomada por SCM Atacama KOZAN en favor de EMELAT S.A. por un valor de US\$951.000.- para garantizar suministro eléctrico de energía y potencia.
- A fojas 673, Boleta de Garantía N° 2460 del Bank Of Tokyo- Mitsubishi UFJ tomada por SCM Atacama KOZAN en favor de EMELAT S.A. por un valor de US\$149.000.- para garantizar remanentes de subtransmisión y Boleta de Garantía N°2495 del Bank Of Tokyo- Mitsubishi UFJ tomada por SCM Atacama KOZAN en favor de EMELAT S.A. por un valor de US\$129.000.- para garantizar obligación de suministro eléctrico de facturación mínima.
- A fojas 679, factura Electrónica N°2696 de fecha 06 de abril de 2015 emitida por Empresa Nacional de Electricidad S.A. a Empresa Eléctrica Atacama S.A. por un monto total de \$ 1.155.855.967.
- A fojas 680, cartola histórica de cuenta corriente N°0-000-0024961-0 del Banco Santander, perteneciente a Compañía General de Electricidad S.A., que da cuenta del cargo por concepto de pago de Factura Electrónica N°2696 a Empresa Nacional de Electricidad S.A. por la suma de \$ 1.155.855.967, con fecha 06 de mayo de 2015.
- A fojas 682, carta de fecha 24 de julio de 2015 dirigida a don Francisco Sánchez, Subgerente General de S.C.M. Atacama KOZAN, en la cual EMELAT S.A. informa la reliquidación por subtransmisión pendiente de contratos de suministro de energía eléctrica entre EMELAT y S.C.M. Atacama KOZAN.
- A fojas 683, detalle reliquidación por Decreto Supremo N°14 que fija fórmulas de subtransmisión periodo a reliquidar enero del 2011 a diciembre del 2014.
- A fojas 684, carta D.P.N°0033/2015 del Centro de Despacho Económico de Carga Sistema Interconectado Central (CDEC SIC) de fecha 14 de enero de 2015, referente a la reliquidación pagos de subtransmisión periodo enero de 2011 a marzo 2013 por aplicación Decreto Supremo N°14.
- A fojas 686, nota de Crédito Electrónica N°2311039 emitida por Compañía General de Electricidad (CGE) a cliente libre Empresa de Ferrocarriles del Estado, de fecha 17 de septiembre de 2015 por un monto total de \$1.416.253.058.- por concepto de Reliquidación.

Confesional:



Que en escrito de fojas 677 petitionó citar a absolver posiciones al representante legal de la demandada, el que fue modificado mediante resolución de fojas 749, quien compareció en audiencia de fojas 760, afirmando el punto indicado en el numeral 1, respecto a las preguntas contenidas en los numerales 2 y 3 señala que no entiende, dejándose constancia por orden del Tribunal que leídas todas las posiciones al absolvente, manifiesta expresamente que no entiende las preguntas ni el idioma.

Oficios:

A fojas 750, informa don Daniel Salazar Jaque, Director Ejecutivo Coordinador Eléctrico Nacional, señalando que en atención a que la publicación del decreto mencionado se produjo con posterioridad al inicio de su período de aplicación conforme la misma normativa previó, la Dirección de Peajes del CDEC-SIC, actualmente Coordinador Eléctrico Nacional, aplicó dicho marco tarifario para el Sistema Interconectado Central y en particular, informó mediante carta DP N°0033 de fecha 14 de enero de 2015, cuya copia se adjunta, la reliquidación de los Pagos de Subtransmisión que correspondía realizar desde el inicio de la vigencia de las nuevas tarifas del Decreto Supremo N°14, es decir para el período enero 2011 a marzo 2013. Cabe señalar que los pagos por uso de las instalaciones de subtransmisión definidos conforme al Decreto Supremo N°14, son aplicables tanto para clientes regulados como clientes libres que hagan uso de dichas instalaciones.

A fojas 777 reiterado a fojas 793, Eugenio Labarca B, abogado Fiscalía Banco Santander, informa que con fecha 6 de mayo del año 2015, se cargó cuenta corriente N° 249610 cuyo titular es Compañía General de Electricidad S.A., y se abonó a cuenta corriente N° 1029991, titular Enel Generación Chile S.A. por la suma de \$1.155.855.967 y adjunta el respaldo correspondiente.

A fojas 791, Carolina Zelaya Ríos, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, señala en síntesis que el pago por uso de las empresas que efectúan retiros no distingue si éstos son para clientes libres o regulados, siendo el alcance de la disposición válido para ambos tipos de suministros. Es por ello que el numeral 6 del artículo segundo del Decreto estableció las fórmulas para la determinación del pago por parte de quienes efectúen retiros de subtransmisión, distinguiendo factores aplicables a retiros en tensiones mayores a la correspondiente a las redes de distribución (clientes libres), respecto de los factores aplicables a retiros en tensión de distribución (clientes regulados).

DÉCIMO TERCERO: Que por su parte, la demandada aportó las siguientes probanzas:

Documental:

- A fojas 502, Factura Electrónica N° 2344208, emitida por EMELAT con 06 de enero de 2012, por la suma total de \$ 385.666.443.



- A fojas 503, Factura Electrónica N° 2350316, emitida por EMELAT con fecha 09 de Febrero de 2012, por la suma total de \$ 390.091.942.
- A fojas 504, Factura Electrónica N° 2355901, emitida por EMELAT con fecha 07 de marzo de 2012, por la suma total de \$ 340.296.886.
- A fojas 505, Factura Electrónica N° 2362164, emitida por EMELAT con fecha 11 de Abril de 2012, por la suma total de \$ 371.382.489.
- A fojas 506, Factura Electrónica N° 2367809, emitida por EMELAT con fecha 09 de Mayo de 2012, por la suma total de \$ 335.869.546.
- A fojas 507, Factura Electrónica N° 2373641, emitida por EMELAT con fecha 08 de Junio de 2012, por la suma total de \$ 375.259.267.
- A foja 508, Factura Electrónica N° 2391693, emitida por EMELAT con fecha 07 de Septiembre de 2012, por la suma total de \$ 341.855.841.
- A fojas 509, Factura Electrónica N° 2397275, emitida por EMELAT con fecha 05 de Octubre de 2012, por la suma total de \$ 318.749.510.
- A fojas 510, Factura Electrónica N° 2403717, emitida por EMELAT con fecha 09 de Noviembre de 2012, por la suma total de \$ 338.301.282.
- A fojas 511, Factura Electrónica N° 2409574, emitida por EMELAT con fecha 06 de Diciembre de 2012, por la suma total de \$ 332.223.219.
- A fojas 512, Factura Electrónica N° 2416195, emitida por EMELAT con fecha 11 de Enero de 2013, por la suma total de \$ 320.751.703.
- A fojas 513, Factura Electrónica N° 2421890, emitida por EMELAT con fecha 06 de Febrero de 2013, por la suma total de \$ 326.263.554.
- A fojas 514, Factura Electrónica N° 2428260, emitida por EMELAT con fecha 08 de Marzo de 2013, por la suma total de \$ 304.842.381.
- A fojas 515, Factura Electrónica N° 2434508, emitida por EMELAT con fecha 08 de Abril de 2013, por la suma total de \$ 348.935.341.
- A fojas 517, Carta AKGC/24, de fecha 26 de Marzo de 2013, mediante la cual Atacama KOZAN desaprueba oferta formulada por EMELAT para dar solución de continuidad a la relación jurídica.
- A fojas 608 y siguientes, Contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica suscrito entre Empresa Eléctrica Atacama S.A. y Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan, de fecha 16 de abril del año 2010.
- A fojas 626 y siguientes, Informe Jurídico de fecha 28 de julio del 2015 suscrito por el abogado óscar Iriarte Avalos.
- A fojas 636 y siguientes, Informe de análisis de reliquidación por subtransmisión- cobro de Emelat a Atacama Kozan.

Oficios:



A fojas 763, Don Masahiro Shimura, subgerente general, en representación de MUFG Ltda, informa respecto de las boletas de garantía N° 2257, 2256, 2254 y 2255 y adjunta copia de cada una de ellas.

Testimonial:

Óscar Gilberto Iriarte Ávalos quien previamente juramentado declara a fojas 647, respecto del punto tercero que Atacama Kozan tuvo la calidad de cliente libre en su relación contractual con Emelat S.A. y ello en virtud de una estipulación del contrato de suministro eléctrico celebrado por las partes en el mes de Abril del año 2.010. Ello le consta porque esa estipulación era usada habitualmente en los contratos de suministro que celebraba Emelat cuando se quería excluir al requirente del servicio del sistema de tarifas reguladas, señala que lo pudo comprobar durante el periodo en que fue abogado asesor externo de dicha empresa y porque se le requirió la emisión de un informe respecto del contrato de suministro celebrado entre Emelat y Atacama Kozan, acompañado a estos autos. Repreguntado sobre cómo se regulaban los precios para los que eran considerados clientes libres, señala que no conoce esa materia, pero lo que sí le queda claro es que no se le aplicaba el decreto de regulación tarifaria y tal como fluye del contrato, las tarifas deberían haberse regulado por negociación entre ambas conforme al principio de la autonomía y la voluntad. Señala que reconoce el documento que se le exhibe, el cual fue confeccionado por su persona en su totalidad y también reconoce la firma puesta al final del mismo, ratificando todo lo expuesto y señalado en dicho documento. Contrainterrogado señala que el referido informe fue confeccionado en observancia al contrato de compraventa suscrito entre las partes y además considerando dos documentos cursados entre las mismas, específicamente cartas, y teniendo a la vista el decreto N° 14 del Ministerio de Energía, de fecha 14 de febrero de 2.012. Señala que al referirse en el informe a la cláusula sexta del contrato, se refiere a la totalidad de las estipulaciones contenidas en la mentada cláusula y particularmente el N° 6.3 de la misma se refiere a peajes y cargos por el uso del sistema de transmisión, las que deben entenderse incluidas. Señala además que desconoce el alcance del último párrafo del número 6.1 de la misma cláusula sexta del contrato. Expone que ratifica la aseveración contenida en el punto N° 1 de su informe, párrafo primero respecto a la celebración del contrato.

Respecto al punto de prueba N° 4 señala que no se aplica pues justamente el decreto era para los clientes con tarifa regulada, cuyo no era el caso de Atacama Kozan. Repreguntado señala que reconoce el informe que se le exhibe de fs. 626, indicando que el Decreto 14 del año 2.012 no puede aplicarse al caso del contrato celebrado por las partes de este juicio, toda vez que fue publicado en el Diario Oficial con fecha 09 de abril de 2.013, es decir, nueve días después que había terminado el contrato celebrado entre las partes, cuya fecha de expiración fue el día 31 de marzo de 2.013. De acuerdo a lo señalado en el



informe, dicho decreto no puede aplicarse en forma retroactiva al caso del contrato de autos.

Juan Antonio León Muñoz Manríquez, quien legalmente juramentado declara a fojas 655, indicando respecto al punto tercero que sí está establecido en la legislación eléctrica que los clientes con las características técnicas como las de Atacama Kozan, es decir, con potencia conectada superior a 5 MegaWatts no puede contratar ni tener la calidad de cliente regulado. Repreguntado señala que las tarifas de suministro de energía eléctrica para clientes libres o no regulados resultan de un proceso de negociación entre el proveedor y el cliente, ello está establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos. Al exhibirle el documento que rola a fs. 636 y ss. Señala que corresponde a un informe del año 2015, preparado por ellos como empresa consultora respecto del análisis de un cobro por subtransmisión realizado por Emelat a Atacama Kozan. Contrainterrogado aclara que el informe lo elaboró la consultora de la cual es responsable legal y para efectos de considerar todos los antecedentes legales del mismo, es que se solicitó la colaboración y la opinión especializada del Estudio Jurídico Iriarte, Barón y Bondi. Señala que no recuerda exactamente todos los conceptos del contrato, pero básicamente los que se refieren a energía, transporte, potencia y no recuerda si tenía otros cargos o conceptos. Al exhibirle nuevamente el informe, particularmente a lo descrito a fs. 640 vta., punto N° 1, párrafo 6, 7 y 8, señala que sí, ya que todo lo que el CDEC-SIC establezca como costo por uso del sistema troncal son de cargo del usuario final, eso significa que Atacama Kozan paga un valor provisorio que es el valor que se conoce al momento de la emisión de la factura y posteriormente este valor es ajustado por el CDEC-SIC, que actualmente no existe, al monto que en definitiva se indique.- Para operar así, las empresas proveedoras establecen unas garantías en forma de boletas de garantía, al consumidor final. Respecto al punto cuarto señala que entiende que no. Eso está justificado en el informe legal, pero básicamente tiene que ver con la expiración del contrato, la fecha de aplicación del decreto, la vigencia de las boletas de garantía, las cuales no se solicitó que fueran renovadas y otros conceptos.

Yanine Angélica Robledo Magnata, quien legalmente juramentada, a fojas 660 declara al punto décimo que da fe que los cobros que hacía Emelat se cancelaban, previa entrega de factura, todos los meses a los quince días de recibida la factura, máximo treinta días. Durante la ejecución del contrato siempre hubo buena fe de ambas partes. Repreguntada especifica que ella debía velar por el fiel cumplimiento de ese contrato, ya que se desempeñaba como Gerente de Operaciones, siendo su labor supervisar que la persona que tenía que hacer el control y revisar los montos de la factura, labor que cumplía Juan Armijo, Jefe de División del Departamento de Energía y Desarrollo de la compañía, cumpliera con su labor. Señala además que más de una vez, con una frecuencia de cada seis meses ella sostuvo reuniones de coordinación con el personal de Emelat, que



eran reuniones más bien protocolares, para saber cómo estaba el servicio y en ninguna de ellas existió algún reclamo por parte de Emelat en cuanto a algún incumplimiento por parte de Atacama Kozan respecto al pago de la factura. Contrainterrogada señala que todos los cobros a que hace mención en la primera respuesta se refieren a los estipulados en el contrato como cliente libre, como por ejemplo los Kw consumidos, la potencia demandada, peajes de transmisión y subtransmisión, entre otros. Expone además que le consta el fiel cumplimiento del contrato en los pagos, ya que como política de Atacama Kozan, el pago a todos sus proveedores era a quince días de recibida la factura.

Juan Hilario Armijo Rojas, quien legalmente juramentado y libre de tachas, declara a fojas 663, respecto del punto décimo que sí le consta la buena fe ya que él tenía a cargo revisar las facturas de energía, darle el visto bueno, con todos los parámetros que se consideraban en la misma y finalmente entregarla a Contabilidad para que ellos hicieran el pago, esto durante cada mes. Expone que su revisión consistía en corroborar que la lectura que tenía el medidor fuera correcta y luego hacer la operación de multiplicar los KW gastados por el valor de la energía y que este valor fuera el correcto, operación que hacía mensualmente, también se consideraba la demanda máxima, transmisión, subtransmisión y los cargos fijos que venían incorporados a la factura. Nunca hubo problemas en cuanto al pago de la factura, ni otro ítem. Repreguntado respecto si sostuvo reuniones de coordinación con personal de Emelat, señala que estuvo en la evaluación del contrato y la definición del mismo y en ninguna de estas reuniones hubo consultas acerca de los pagos de energía. Contrainterrogado señala que cuando se refiere a cobros en la facturación habla de consumo, demanda máxima, transmisión y había algunos otros ítems, por ejemplo si había que cortar la energía por mantención, cobraban por el corte y la reposición, que no era por no pago sino porque había que cortar la energía por temas de operación. Indica que los peajes y cargos por subtransmisión a facturar fueron fijados de mutuo acuerdo por las partes, Emelat presentó una fórmula que fue aceptada por ellos y que estaba de acuerdo por el CDEC-SIC quien firma ese valor.

DÉCIMO CUARTO: Que con el mérito de las alegaciones efectuadas en los escritos del periodo de discusión, más las pruebas aportadas por los intervinientes, en especial el contrato de fecha 16 de abril de 2010, es posible tener por acreditadas las siguientes circunstancias:

1.- Que entre la demandante, Empresa Eléctrica Atacama S. A. o Emelat y la demandada Atacama Kozan o Kozan, con fecha 16 de abril de 2010 se celebró un contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica para satisfacer los requerimientos de la demandada respecto al uso propio en el recinto correspondiente a la faena minera ubicada en el inmueble rol N° 00024-00150, de la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó.



2.- Que dicho contrato se pactó para regir entre el 1 de agosto de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2013.

3.- Que en la cláusula sexta de dicho contrato se pactó que por tratarse de un suministro de energía eléctrica no sometido a regulación de precios conforme lo dispuesto en el artículo 147° de la Ley Eléctrica, las partes estipulaban libremente una tarifa, cuyos componentes quedaron estructurados de acuerdo a los siguientes cargos que se sumarían de forma mensual: cargo por energía activa, cargo por demandan máxima de potencia en horas de punta, cargo por demandan máxima de potencia en horas fuera de punta, cargo por energía reactiva y factor de potencia, cargos por uso del sistema troncal, cargos por uso de sistema de subtransmisión y otros cargos.

4.- Los precios base de energía activa y potencia en horas de punta y fuera de punta, están definidos en la S/E Cardones 220 kV en una frecuencia de 50 Hz y serán los siguientes:

Tabla N° 2

Precio Energía Activa US\$/MWh: 92,909.

Precio Potencia HP US\$/kW-mes (PHP): 10,594.

Precio Potencia HFP US\$/kW-mes: 2,648.

También se pactó que los precios indicados no incluyen costos de peajes ni costos de servicios complementarios, planes de seguridad, planes de emergencia, asociados al suministro a EL CLIENTE objeto del presente contrato, y que conforme los decretos tarifarios de racionamiento o instrucciones obligatorias para la operación del SIC, que emanen de autoridades competentes, sean de cuenta y cargo de KOZAN.

5.- Que en la cláusula 6.3 se pactó que serán de cargo de KOZAN todos los pagos por el uso del sistema de transmisión troncal y de los sistemas de transmisión no troncales, conforme la ley vigente y sus futuras modificaciones, reglamentos o normas complementarias, que corresponda pagar por sus consumos, montos que serán incluidos en forma separada en la factura de suministro eléctrico.

En virtud de ello, EMELAT aplicará mensualmente a KOZAN, y en función de la energía consumida, el valor que corresponde al cargo único y al peaje unitario, si fuere este último aplicable por el uso del sistema troncal determinado por la Dirección de Peajes del CDEC_SIC o quien la reemplace. Dichos montos son publicados anualmente por el CDEC_SIC en su informe de peajes. A modo de referencia, en esa fecha el cargo único por el uso del sistema troncal incluido en el Decreto de Precios de Nudo vigente a la fecha correspondía a 0,371 \$/kWh.

EMELAT facturará provisionalmente con dicho valor y una vez conocidos los valores definitivos del cargo único y del peaje unitario, las partes reliquidarán los montos facturados por este concepto.



6.- Que en el punto décimo séptimo KOZAN constituyó cuatro garantías a favor de EMELAT, las que permanecerían vigentes mientras dure el contrato y cuyo objeto era asegurar el cumplimiento de sus obligaciones respecto del suministro eléctrico. Dichas garantías eran las siguientes:

1. Suministro eléctrico de energía y potencia: US\$951.000.-
2. Remanentes de potencia: US\$663.000.-
3. Remanentes de subtransmisión: US\$149.000.-
4. Facturación mínima: según tabla N° 3.

7.- Que en el mismo punto décimo séptimo, acápite final, se pactó que una vez finalizado el contrato en la fecha estipulada en la cláusula tercera y efectuadas las reliquidaciones correspondientes, EMELAT procederá a hacer devolución de las garantías o parte de ellas en caso de hacer uso de parte de las mismas para cubrir las obligaciones emanadas del contrato.

DÉCIMO QUINTO: Que, teniendo presente la discusión de autos, corresponde a este sentenciador determinar la procedencia de la petición formulada por la demandante, en orden a que se obligue a ATACAMA KOZAN al pago de \$967.433.218 más IVA, con indemnización de perjuicios, por el cumplimiento forzado del contrato referido, en virtud de la aplicación de la condición establecida en el artículo 1489 del Código Civil, también conocida en doctrina como condición resolutoria tacita, por la cual el contratante diligente, en caso de que el otro no cumpla lo pactado, podrá pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios.

En este orden de ideas, EMELAT expone que el Decreto Supremo N° 014 de fecha 13 de abril de 2013 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija las tarifas de subtransmisión y de transmisión adicional y sus fórmulas de indexación para el periodo 2011-2014, es aplicable a la relación jurídica existente con ATACAMA KOZAN. De este modo, sería procedente la reliquidación efectuada y el cobro extrajudicial realizado mediante carta GC/80/2015 de fecha 24 de julio de 2015 a la demandada.

Respecto a esta alegación, la demandada ha manifestado que contrató con EMELAT como cliente libre o no sometido a regulación de precios, por lo que el DS N° 014 no le sería aplicable, habiéndose regulado las tarifas únicamente mediante la autonomía de la voluntad de las partes.

DÉCIMO SEXTO: Que, de este modo, conforme el principio de autonomía de la voluntad, en la cláusula sexta del contrato en cuestión los intervinientes pactaron que se trataba un contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica de un suministro no sometido a regulación de precios conforme lo dispuesto en el artículo 147° de la Ley Eléctrica, procediendo las partes a estipular libremente una tarifa.

A la vez, establecieron que serán de cargo de KOZAN todos los pagos por el uso del sistema de transmisión troncal y de los sistemas de transmisión no troncales, conforme



la ley vigente y sus futuras modificaciones, reglamentos o normas complementarias, que corresponda pagar por sus consumos, procediendo EMELAT a facturar provisionalmente y una vez conocidos los valores definitivos del cargo único y del peaje unitario, las partes reliquidarían los montos facturados por este concepto.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, no obstante lo establecido en el motivo anterior, se encuentra probado en autos que el contrato fue pactado para regir entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de marzo de 2013, periodo en el cual se cumplió de buena fe tanto por la demandante como la demandada, según consta de las facturas mensuales acompañadas en fojas 502 y siguientes y de la testimonial de la demandada, procediendo a finiquitarse el contrato con el pago de la última obligación liquidada.

Que, en este punto, conforme las alegaciones de ambas partes, queda acreditado en autos que la demandante EMELAT procedió a devolver las garantías tomadas por KOZAN para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, lo que ciertamente denota un convencimiento de parte de la actora, y actuar conforme a ello, respecto a que todas las obligaciones pactadas entre ambos se encontraban cumplidas.

En este orden de ideas, relevante es tomar en consideración que en el cláusula décimo séptima del contrato, en su aparatado final, se estableció expresamente que *“Una vez finalizado el contrato en la fecha estipulada en la cláusula TERCERA y efectuadas las reliquidaciones correspondientes, EMELAT procederá a hacer devolución de las garantías o parte de ellas en caso de hacer uso de parte de las mismas para cubrir las obligaciones emanadas del presente contrato.”*

Es decir, EMELAT al exigir el pago de una reliquidación efectuada con posterioridad a la extinción del contrato y efectuada la devolución de las garantías, está actuando en forma extemporánea y contra su propia conducta durante el desarrollo y culminación de la relación contractual que lo unía con la demandada, ya que el propio contrato establecía que la devolución de las garantías se realizaría una vez finalizado éste y efectuadas las reliquidaciones correspondientes.

A mayor abundamiento, la actora podría haber retenido las garantías o exigir que estas se renovaran, ya que aún no se encontrarían realizadas todas las reliquidaciones correspondientes para terminar completamente la relación contractual, lo que no realizó.

Así las cosas, sólo queda concluir que el contrato se celebró, se desarrolló y terminó antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 14, publicado con fecha 09 de abril de 2013 y tanto la demandante como la demandada actuaron conforme a esa convicción.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en este sentido, relevante es recordar que conforme lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil: *“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causa legales.”*

A la vez, el artículo 1546 del mismo cuerpo normativo, establece que: *“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos*



se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella."

Por último, el artículo 1560 del Código Civil señala que: "*Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.*"

De este modo, en estos autos ha resultado probado que la demandada y el demandado ejecutaron el contrato de buena fe, cumpliéndose mes a mes las mutuas obligaciones contraídas. Luego, una vez terminado el plazo del contrato, este se finiquitó adecuadamente, devolviéndose las garantías tomadas, por lo que, inclusive estimando que el Decreto Supremo N° 040 se aplica a los "clientes libres", dicha norma no puede ser aplicada en el caso concreto, ya que los propios contratantes, conforme lo disponen los artículos 1545, 1546 y 1560 ya citados, lo entendieron de ese modo, dando por finiquitada su relación bajo la aplicación del decreto anterior.

DÉCIMO NOVENO: Que, conforme lo razonado, no concurrirían los presupuestos establecidos en el artículo 1489 del Código Civil, por cuanto no se encontraría acreditado en autos incumplimiento alguno imputable al demandado, elemento central que generaría el derecho de la contraparte para pedir la resolución del contrato o el cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios, por lo que forzoso resulta rechazar la demanda de autos.

VIGÉSIMO: Que el resto de la prueba rendida en nada altera las conclusiones arribadas en los considerandos anteriores, por cuanto los oficios de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y del Director Ejecutivo Eléctrico Nacional, allegados a fojas 791 y 750, no son más que declaraciones emanadas de terceros que no han concurrido al juicio a ratificar sus dichos, emitiendo ambos meras opiniones sobre aspectos jurídicos cuya resolución corresponde a este tribunal, mediante la interpretación de las normas jurídicas involucradas y las cláusulas del contrato.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en cuanto a la excepción perentoria de pago deducida por la demandada y habiéndose rechazado la demanda en todas sus partes, se omitirá pronunciamiento de la misma, por inoficioso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1489, 1545, 1546, 1560 y 1698 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 341 y 342 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA:

EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES DE DOCUMENTOS DEDUCIDAS POR LA DEMANDADA:

I.- Que **SE RECHAZAN**, sin costas, las observaciones de documentos formuladas por la demandada en fojas 753, 782 y 796.

EN CUANTO A LAS TACHAS FORMULADAS POR LA DEMANDANTE:

II.- Que **SE RECHAZAN**, sin costas, las tachas formuladas por la demandante en fojas 647, 655 y 663.



EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO:

III.- Que **SE RECHAZA**, la demanda interpuesta por doña **María Teresa Hola Villegas**, en representación de **Empresa Eléctrica Atacama S.A.**, o **EMELAT S.A.**, en juicio ordinario de incumplimiento de contrato, en contra de **Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan**, representada legalmente por **Yoshifumi Noguchi** y **Francisco Sánchez Barrera**, todos ya individualizados.

IV.- Que se condena en costas a la demandante por haber resultado totalmente vencida.

Anótese, regístrese, notifíquese personalmente o por cédula y archívese en su oportunidad.

Rol C-1034-2016

Dictada por don Ubaldo Basoa Oviedo, Juez Suplente del Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó, Autoriza doña Rosa Muranda Araya, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Copiapó, veintiuno de Enero de dos mil diecinueve**



